

ADIÓS AL PARAÍSO

La presa de Yacyretá en el Río Paraná – Argentina / Paraguay

Yacyretá, la tierra de la luna

Texto: Marisancho Menjón

Es famosa la expresión con la que el ex presidente de Argentina Carlos Menem calificó el megaproyecto hidroeléctrico de Yacyretá: “Monumento a la corrupción”. Con ser ilustrativa de los problemas habidos en la dilatada historia de esta presa, pues es del dominio público que se desviaron varios miles de millones de dólares del presupuesto de la obra, sería más adecuado calificar a Yacyretá como “monumento a la imprevisión”, dado que los gravísimos problemas económicos, sociales y ambientales que ha causado su construcción se han debido en buena medida a ese factor: la imprevisión; deliberada, tal vez, pero en todo caso imprevisión.

Yacyretá se empezó a construir, e incluso comenzó a operar, sin que se hubieran hecho estudios sobre los daños sociales y ambientales que se iban a ocasionar. A sus promotores, los problemas les han ido estallando ante los ojos, como si jamás hubieran contado con la posibilidad de que existieran. ¿Cómo es posible no prever que el anegamiento de decenas de miles de hectáreas de cultivos, bosques y ecosistemas únicos en el mundo tendría gravísimas consecuencias de todo orden? ¿Cómo no pensar que el desplazamiento de cincuenta mil personas tendría que ser compensado –aunque muchos daños no tengan posible indemnización económica– con recursos suficientes?

La de Yacyretá, como la de tantas otras grandes presas en el mundo, es una larga historia. Los primeros tanteos para represar el río Paraná, en la frontera entre Paraguay y Argentina, datan de 1928. Pero el proyecto hidroeléctrico definitivo nació en 1973, con la firma de un tratado por el que ambos países se comprometían a crear la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como empresa responsable de su construcción y gestión. La financiación correría a cargo del Gobierno argentino, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las obras se iniciaron en 1983; en 1994 se llenó el embalse y se inauguró la primera central. Se construyeron dos presas de hormigón de más de 2 km de

longitud cada una, más 67 km de terraplenes para posibilitar el represamiento del Paraná y sus brazos en una zona sumamente llana y abierta. La superficie inundada sobrepasa los 1.100 km². Aunque el presupuesto inicial era de 3.000 millones de dólares, los retrasos en la ejecución y el desvío de dinero por problemas de corrupción, llevaron a que en 2004, aún con las obras lejos de concluir, el coste se hubiera disparado a 14.000 millones de dólares. La altura de la presa en esta primera fase ya completada es de 76 m, siendo que el proyecto prevé elevarla a 83 m, razón por la que las turbinas operan hoy tan sólo al 60% de su potencia.

Más allá de la quiebra financiera derivada del monumental fraude que ha habido, la mayor parte de los problemas sociales y ambientales creados por la presa en su primera fase toman perfiles de catástrofe humanitaria si se llegara a producir el previsto recrecimiento. En estas condiciones, las entidades financieras que han venido promoviendo el proyecto se cuestionan la continuidad de su apoyo.

Tanto en BM como el BID y la propia EBY han incumplido manifiestamente sus propios compromisos y reglas internas de actuación. Yacyretá se inició en una época en la que tanto Paraguay como Argentina estaban gobernadas por dictaduras, y sólo cuando se instauraron regímenes democráticos se abrió a los afectados la posibilidad de reclamar sus derechos y de denunciar los atropellos sufridos. Ello permitió, tanto al BM como al BID, justificar el incumplimiento de sus propios principios internos, según los cuales no deben financiar proyectos que atenten contra los derechos humanos y el medio ambiente. La denuncia de los afectados por la violación de estos principios llevó a los citados bancos a investigar la situación, constatando que las denuncias eran fundadas.

Tanto el Banco Mundial como el BID reconocieron, de hecho, que los planes de reasentamiento de afectados (unos 50.000) y de mitigación de impactos ambientales, asumidos por la EBY, no se habían cumplido más que en una mínima parte. Igualmente se reconoció que los reasentamientos construidos no ofrecían condiciones dignas de habitabilidad. En uno de los informes finales del Banco Mundial se llegó a decir que entre los miembros de la administración de la EBY "no había un profesional con conocimientos, experiencia o interés suficiente para supervisar el plan de protección ambiental y reasentamiento".

Más allá de la gravedad de los hechos reconocidos por los citados informes, deben reseñarse otros si cabe más graves, de los que existen pruebas

documentales, testimonios y grabaciones: como el desalojo violento de comunidades a cargo de bandas paramilitares, con la quema de sus poblados; la inundación de haciendas y viviendas, por elevación del nivel del embalse, sin previo aviso, lo que ha llevado a daños graves y evitables, como la pérdida de enseres domésticos, herramientas y ganado, que no hubo tiempo de salvar, en la huida precipitada; el trato vejatorio sufrido por miles de familias, forzadas a vivir en asentamientos en los que no cuentan con tierra fértil, ni pesca, ni siquiera agua potable. Algunos asentamientos, como el de Atinguy, van a ser, de hecho, desalojados para realojar a las familias en otros lugares. La situación de mucha gente desplazada es tan lamentable que son muchos los que han optado por emigrar a las periferias urbanas para intentar sobrevivir en los basurales.

La desgracia y la miseria de decenas de miles de desplazados contrasta con las imágenes del brindis con champán de autoridades, funcionarios y trabajadores, el día de la inauguración de la primera fase de Yacyretá; contrasta con los lemas de la propaganda oficial: "Con una sonrisa hacia el futuro", "Energía que mueve el país", "En un mundo para los niños" ...; contrasta, en suma, con los argumentos de progreso ofrecidos por la EBY. ¿Progreso para quién?, se preguntan esos 50.000 desplazados.

A los indígenas Mbya Guaraní que ocupaban la isla Yacyretá, hoy casi enteramente bajo las aguas, se les cambió su territorio ancestral, miles de hectáreas de donde obtenían todo lo necesario para vivir, por 370 ha de tierra seca e inhóspita. En el colmo del sarcasmo, el BM saludó en su día que estos indígenas tuvieran, de este modo y "por primera vez", títulos de propiedad sobre unas tierras.

A fecha de hoy se han inundado más de 50.000 ha de terreno que incluían ecosistemas únicos en el mundo, con multitud de especies endémicas (algunas, desconocidas para la ciencia). Miles de hectáreas no previstas, en muchos casos terrenos de cultivo, se van inundando también progresivamente al elevarse el nivel freático en el entorno del embalse. En los Esteros de Iberá, el mayor humedal de Argentina, espacio Ramsar protegido oficialmente, a pocas decenas de kilómetros de Yacyretá, el nivel de las aguas está subiendo alarmantemente, lo que hace temer una verdadera catástrofe ecológica.

Yacyretá ha acabado con la pesca en la zona. Antes de la construcción de la presa, la población ribereña del Paraná se alimentaba fundamentalmente de pescado; hoy, los menores de quince años prácticamente no lo han probado

en su vida. Las aguas del embalse están fuertemente contaminadas. Miles de hectáreas de bosque se pudren bajo las aguas; ni siquiera se tomaron la molestia de deforestar la zona previamente. Los problemas de salubridad de las aguas se multiplican. Ya nadie se baña en el río. Antes, la gente vivía en el río del río. El Paraná ha muerto en Yacyretá.

La EBY tenía el compromiso de compensar y remediar los daños sociales y ambientales antes de proceder al llenado en la primer fase. Sin embargo, hoy condiciona que esto se pueda hacer al recrecimiento de la presa a 83 m de altura, de modo que pueda generarse toda la energía proyectada. Lo que no explican es que esa subida de la cota supondría inundar otras 50.000 hectáreas y desplazar a otras 50.000 personas, con lo que se superarían los 100.000 desplazados.

Completada la fase I, son muchas las voces que reclaman un alto en el camino que permita desarrollar una auditoría que aclare el destino de los miles de millones desaparecidos o malversados, y centrar esfuerzos en recuperarlos para destinarlos a cubrir los compromisos de compensación a los afectados. Cada vez resulta más evidente la necesidad de reevaluar esa segunda fase de recrecimiento, tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental. Un recrecimiento que supondría inundar no sólo miles de hectáreas, pueblos y haciendas, sino también el centro histórico de la ciudad de Encarnación, buena parte de Posadas y casi la totalidad de Carmen del Paraná.

Parece más que razonable redimensionar los objetivos productivos de Yacyretá, para evitar catástrofes mayores, complementando la capacidad hidroeléctrica actual con modernas estrategias de ahorro y de producción de energía eólica y solar.

Yacyretá más allá de representar una catástrofe humanitaria y ambiental, tiene asegurado un balance económico ruinoso. Es tiempo de acotar el desastre, compensar en lo posible a las víctimas y depurar responsabilidades.